

EL DETERIORO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ULTIMO SEMESTRE

La violación de los derechos humanos por parte del ejército, los cuerpos de seguridad y los escuadrones paramilitares ha experimentado en El Salvador un brusco incremento a partir de septiembre del presente año, en lo que ha parecido ser entre otras razones una desesperada respuesta de la ultraderecha al renovado ímpetu con que el FMLN ha ido recobrando la iniciativa en la guerra desde la ofensiva de San Miguel, a comienzos del mismo mes. En efecto, las cifras de las personas que de un modo u otro han sucumbido a la represión política, que según los informes más recatados de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado habían oscilado alrededor de 370 víctimas durante julio y agosto, los dos meses inmediatamente posterior a la certificación de junio de Reagan ante el Congreso norteamericano, han ascendido durante septiembre, octubre y noviembre a un promedio escalofriante de 600 víctimas mensuales.

Esto ha acontecido después de un período relativamente prolongado en el cual las amenazas del cese de la ayuda militar por parte de la administración norteamericana habían logrado persuadir al gobierno salvadoreño —ya que las condenas de la ONU y de otros organismos internacionales no habían tenido éxito en este empeño— de la importancia de retocar su imagen internacional y neutralizar en alguna medida sus propios desequilibrios sociales internos mediante una política más vigorosa de control de los escuadrones de la muerte y de los desmanes de la Fuerza Armada. No obstante ello, el notorio incremento de la represión, tanto la ejecutada por los cuerpos de seguridad directamente como de la efectuada por los escuadrones paramilitares al ampa-

ro de la connivencia gubernamental, ha vuelto a confirmar que la violación de los derechos humanos continúa siendo el talón de Aquiles de la legalidad constitucional bajo cuya cobertura avanza a tropezones el proceso de democratización en El Salvador.

En medio de una coyuntura en la que la evaluación del operativo Paz y Bienestar para San Vicente había mostrado sus magros resultados, a pesar de la confianza que la Fuerza Armada, el gobierno salvadoreño y la Casa Blanca habían cifrado en él, la ultraderecha volvió a recurrir con sus antiguos bríos a sus fuerzas paramilitares. Así, en una deliberada y explícita voluntad, públicamente confesada, de oposición a toda iniciativa de negociaciones con la izquierda, distintos escuadrones de la muerte han desatado desde la primera semana de septiembre una escalada de agresión contra diversos sectores universitarios, sindicales y religiosos. Esta escalada ha sido vanguardizada por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) y la brigada Maximiliano Hernández Martínez, pero bajo su bandera han surgido otras organizaciones de ultraderecha, como el Ejército Anticomunista Salvadoreño (EAS), el Comando Nacionalista Salvadoreño (CNS) y el Gremio Anticomunista Salvadoreño (GAS).

La reactivación de los escuadrones de la muerte era algo que el proyecto de la ley de amnistía y rehabilitación ciudadana había hecho previsible y que su promulgación el 4 de mayo del presente año comprobó. A raíz de esta promulgación, las capturas ilegales y las cifras de desaparecidos empezaron a experimentar un abrupto incremento. Con todo, fue sólo dentro del contexto de la ventilación cada vez más oficial de las



propuestas de diálogo con el FMLN-FDR, que la desesperación de la ultraderecha superó sus últimas inhibiciones y la lanzó a una campaña de violación de los derechos humanos tan salvaje y brutal que no sólo ha puesto en aprietos a la embajada norteamericana y al régimen provisional de Magaña, sino que incluso han suscitado las protestas y condenas, en apariencia sentidamente airadas, de los más inescrupulosos miembros de la administración norteamericana, del propio régimen de Magaña y de los sectores políticos más conservadores de El Salvador, así como del COPREFA.

En efecto, la problemática de los derechos humanos ha adquirido en los últimos meses una importancia de primer orden para la administración norteamericana y, por consiguiente, para el gobierno y los partidos políticos salvadoreños. Obviamente, no es que antes esta problemática no tuviera en sí misma una importancia decisiva, como lo han manifestado siempre, a riesgo de sus vidas, diferentes organizaciones de derechos humanos, como el Socorro Jurídico, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, cuya presidenta, Marianela García Villas, pagó con su vida su insobornable defensa de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Pero ha sido sólo la irracionalidad inaudita que la violencia de la derecha ha cobrado desde el mes de septiembre lo

que ha puesto oficialmente sobre el tapete la importancia de esta problemática.

La visita de la comisión Kissinger y las acusaciones en las que D'Aubuisson señalaba la vinculación entre los prisioneros de la Fuerza Armada y los escuadrones paramilitares han sido algunos de los acontecimientos fundamentales a través de los cuales se ha podido constatar que la violación de los derechos humanos en El Salvador es un problema que está generando una preocupación cada vez menos disimulada en la administración Reagan. No es para menos. Los escuadrones de la muerte han lanzado amenazas y operativos frontales contra sectores a los que en el último año y medio habían respetado relativamente, si bien a regañadientes, como podían ser ciertos ámbitos universitarios y profesionales prestigiados, organizaciones sindicales moderadas y círculos afines al arzobispado, incluso una personalidad como Mons. Gregorio Rosa, cuya reticencia ante la izquierda es bien conocida, ha sufrido las amenazas de la ultraderecha; y no se diga de Mons. Rivera o de los refugios amparados por el arzobispado. Estos ataques parecen indicar que, o bien la ultraderecha ha perdido los últimos residuos de lucidez política, o bien, aprovechando la crisis permanente en la cúpula militar —que el relevo de García por Vides Casanova no logró neutralizar— y las incompatibilidades irreconciliables que las discusiones en la

asamblea han puesto en evidencia entre los distintos partidos políticos, ha optado por reforzar su propia autonomía ante un proceso de democratización con el que nunca ha estado dispuesta a condescender.

Los efectos de este fortalecimiento de la autonomía de la derecha la han llevado incluso a enfrentamientos con la embajada de Estados Unidos, como ha ocurrido a raíz del secuestro por la brigada Maximiliano Hernández Martínez del Dr. Amílcar Martínez, director de asuntos económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya desaparición, en contraste con el silencio temeroso del gobierno de Magaña, ha sido seriamente repudiado por la representación diplomática norteamericana. Desde los tiempos en que la enemistad entre White y D'Aubuisson creció a tal punto que le fuera negada a éste la visa de ingreso a Estados Unidos, la embajada norteamericana no había vuelto a fruncir el ceño a la derecha tan públicamente como lo ha hecho en esta ocasión.

Por otra parte, sin embargo, tampoco puede decirse que el gobierno salvadoreño no disponga de mecanismos para controlar en buena medida la conducción de los escuadrones paramilitares. Aun cuando se haya apresurado a desmentirlas, las acusaciones de D'Aubuisson contra la Fuerza Armada, arrancadas por la decidida interpelación de Kissinger, expresaron una convicción ampliamente difundida desde hace mucho tiempo en la opinión pública salvadoreña. No obstante las condenas de la embajada, la impunidad con que los escuadrones de la muerte han contribuido a segar la vida de los 35 mil salvadoreños asesinados en los últimos tres años, no puede explicarse si sus actividades no cuentan de alguna manera con la connivencia pasiva del gobierno, cuando no con un decidido apoyo gubernamental. Las capturas de José Francisco Menjivar y Hugo Martínez Guzmán a principios de noviembre, efectuadas por la Policía Nacional, y el comunicado posterior en el que el ESA admitía tenerlos en su poder y proponía canjearlos por ciertos oficiales de la Fuerza Armada apresados en combate por el FMLN, son hechos recientes que corroboran aquella convicción.

Pero es que, además, aunque el gobierno de Magaña argumente que las actividades de los escuadrones paramilitares escapan a su control y que, por tanto, no es responsable de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los mismos, debe recordar que también los ope-

rativos militares realizados por la Fuerza Armada durante la segunda mitad de este año se han aproximado a la saña con que el ejército actuó a lo largo de 1980 y 1981. El bombardeo indiscriminado sobre Tenancingo a finales de septiembre acerca del cual ha quedado constancia en abundantes pruebas documentales, es un episodio que no se distancia demasiado de sucesos como los de Sumpul.

Tal parece ser que, de cara a un proceso electoral impuesto por el Pentágono contra el hecho de la ausencia de condiciones propicias, la Fuerza Armada ha realizado una opción definitiva por frenar a cualquier costo la impresionante madurez de fuego de que el FMLN ha dado muestras durante todo este semestre, de manera que el exterminio indiscriminado de la población civil ha dejado menos que nunca de ser un escrúpulo inhibitor, si tal medida proporciona a corto plazo una victoria militar, expediente que, sin embargo, aislado de otras medidas más estructurales para superar la crisis, el discurso del embajador Pickering ante la Cámara de Comercio ha sido el primero en rechazar.

Con todo, no cabe duda de que, cualquiera que sea la interpretación que de esta situación ofrezca Thomas Pickering, la violación de los derechos humanos en El Salvador ha sufrido tal agravamiento a lo largo del último semestre que no sólo ha desvanecido el optimismo primero que sobre esta problemática abrigaba el Pacto de Apaneca, silenciando la locuacidad inicial de la comisión oficial de derechos humanos y desensambrando la sistemática campaña de desinformación del COPREFA, sino que además ha puesto en tales riesgos el futuro de la quinta certificación que la administración Reagan debiera presentar ante el Congreso en enero próximo, que el propio Reagan ha empezado a escudriñar afanosamente todas las posibilidades de evadir este molesto compromiso: certificar el respeto de unos derechos humanos crecientemente más violados a la vista de todo el mundo, justamente en el momento en que el deterioro del ejército salvadoreño hace más imperioso que nunca el incremento de la ayuda militar. Se trata en verdad, para Reagan, de un reto difícil. Pero no podemos jamás desestimar las acrobacias ideológicas con que, en tantas otras ocasiones, ha sabido embaucar al Congreso y a buena parte de la opinión pública norteamericana.

E.C.A.